CABA: Nuevo Código Procesal de la Justicia en las Relaciones de Consumo

La Ley Nro. 6407 (B.O. CABA 19/3/21) establece el Código Procesal de la Justicia en las Relaciones de Consumo (en adelante el 'Código') en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), habiendo entrado en vigencia el 19/4/21.

Hasta tanto se encuentre constituido el Fuero en las Relaciones de Consumo, el Código será de aplicación por el fuero Contencioso Administrativo y Tributario de CABA.

Dicho Código se conforma de 266 artículos y seguidamente presentaremos un resumen de su contenido, pero antes de ello realizaremos una mención de los aspectos más novedosos en la materia:

► **Desplazamiento de la competencia:** tanto de la justicia nacional común de la ciudad de Buenos Aires a la de los tribunales locales de CABA, como de la justicia provincial a los tribunales locales de CABA (los supuestos de competencia son tan amplios que pueden generar nuevas radicaciones en CABA que antes no correspondían). –

Ahora bien, con esta implementación, es menester aclarar que la Justicia en las Relaciones de Consumo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tendrá competencia para entender en las causas que se inicien a partir de su puesta en funcionamiento, es decir, no se aceptan causas que se encuentren en trámite o iniciadas antes de su puesta en funcionamiento efectivo, que continuarán en sus respectivos fueros y jurisdicciones.

A su vez determina que es **improrrogable para el proveedor**, aspecto que habrá que contemplar en los contratos de adhesión si tuvieran cláusula de jurisdicción y competencia.

Ahora bien, sobre el desplazamiento de la competencia cabe puntualizar que analizado desde la perspectiva de las ejecuciones, se ha entendido que hasta tanto no se expida el juez por el cual tramitan actualmente las causas y al no existir la figura del “pagaré de consumo” enunciada en el Código de CABA, la competencia de este tipo de procesos debería continuar en el ámbito de la Justicia Comercial. –

También posee competencia en la ejecución tanto de acuerdos conciliatorios homologados en COPREC, como para los emanados del sistema de conciliación o mediación prejudicial obligatoria de CABA.

En lo que hace a competencia en materia de servicios públicos, entendemos que debería acotarse a los propios de la CABA y no a los federales, conforme la remisión al art. 2º de la ley 210 “Ente Único Regulador de los Servicios Públicos”.

►Fuerte impronta de la **opción en beneficio del consumidor** bajo principios que receptan los ya establecidos en nuestro ordenamiento jurídico.

Sin perjuicio de ello, notamos que se deja la posibilidad al proveedor que requiera la iniciación del incidente de solvencia a los fines de su desestimación.-

Por último, como novedad del nuevo código podemos decir que la legitimación se ha ampliado para los procesos colectivos con Beneficio de litigar sin gastos, siguiendo el juego armónico de las normas, doctrina y jurisprudencia actuales.-

►**Costos del proceso:** puede considerarse que los costos del proceso bajo este régimen ante la justicia local pueden ser **inferiores** a los actuales (en tasa de justicia y monto máximo de perito).

Esta norma toma partido por el criterio amplio de la gratuidad por lo que desde la perspectiva del consumidor no debería suponerle gasto alguno.

Por otro lado, se beneficiaría al proveedor si arriba a un acuerdo con el consumidor, antes de vista de causa (cuya comparecencia es obligatoria para las partes) con un descuento del 50% en el valor de la tasa de justicia. -

También se verían reducidos los costos por el alto nivel de digitalización del proceso, lo cual comprende la virtualidad del diligenciamiento de pruebas, notificaciones y realización de audiencias y actos procesales y sólo se proveerá la producción de pericias que sean consideradas estrictamente necesarias.-

►**Duración del trámite:** El código instauro **dos tipos de procesos** para elección del juez en cada caso, en los cuales se establecen plazos breves, en favor de la celeridad procesal.

Así por ejemplo, se prevén plazos para contestar vistas y traslados de tres (3) o cinco (5) días, según se trate del proceso ordinario o ampliado, respectivamente.

Asimismo solo se aceptará la citación de terceros en los casos en que se hubiere requerido en la instancia previa.

En cuanto a la caducidad, la misma se encuentra regida por el principio protectorio en favor del consumidor ya que al haber impulso de oficio, la caducidad del proceso es reemplazada por el archivo, que no tiene las mismas implicancias. En este sentido, se establece que en los casos en que la actividad recaiga en cabeza de la parte actora, se intimará por cinco (5) días para realizar peticiones bajo pena de archivar el proceso.

►**Domicilio electrónico:** Se instauro también el **domicilio electrónico**, manteniéndose en su caso el constituido por el proveedor en la etapa conciliatoria previa, para la notificación de la demanda.

En caso de no haber denunciado domicilio electrónico, la notificación de la acción se realizará por cédula al domicilio legal o al domicilio real,

destacando que resulta válida la notificación que se realice en el domicilio declarado ante el organismo de registro en la jurisdicción correspondiente para el caso de personas jurídicas.-

No obstante, el Consejo de la Magistratura habilitará un registro para que los proveedores puedan modificar el domicilio constituido en la etapa prejudicial conciliatoria.-

Ahora sí, presentamos el resumen del Código:

I. Principios

Se establece que el proceso ante la Justicia en las Relaciones de Consumo en el ámbito de CABA se rige por los principios que emergen de las normas constitucionales y legales, entre los cuales se destacan:

- a) Informalidad procesal a favor del consumidor, celeridad, inmediatez, concentración, economía procesal, oralidad y gratuidad.
- b) Digitalización
- c) Virtualidad (Prueba, notificaciones, audiencias y actos procesales).
- d) Impulso de oficio.
- e) Conciliación entre las partes hasta el dictado de la sentencia.
- f) Principio de protección al consumidor.
- g) Aplicación de la norma o de la interpretación más favorable al consumidor en caso de duda.
- h) Orden público y operatividad de las normas.
- i) Consumo y producción sustentable.
- j) Tutela judicial efectiva con especial rigurosidad en el caso de consumidores hipervulnerables.

II. Competencia

Primera instancia

Se establece como regla general que la competencia atribuida a la Justicia en las Relaciones de Consumo de Caba es improrrogable para el proveedor y será competente para conocer en asuntos que versen en:

- 1) Conflictos en las relaciones de consumo, regidos tanto por las normas nacionales de defensa del consumidor y lealtad comercial, sus modificatorias y complementarias.
- 2) Los conflictos de consumo que versen como derivados de los artículos 1092 y 1096 del Código Civil y Comercial de la Nación. (en adelante "CCyCN")
- 3) Estipula que la justicia en las relaciones de consumo será competente cuando el consumidor sea actor y cuando el ámbito de CABA sea indistintamente:
 - a) lugar de celebración del contrato,
 - b) lugar del cumplimiento de la prestación del servicio,
 - c) lugar de la entrega de bienes,
 - d) lugar del cumplimiento de la obligación de garantía,
 - e) domicilio del consumidor,
 - f) domicilio del demandado,
 - g) lugar donde el consumidor realice actos necesarios para la celebración o ejecución del contrato.
- 4) Fideicomisos inmobiliarios inscriptos en el Registro Público de Contratos de Fideicomisos de CABA.
- 5) Procesos colectivos.
- 6) Causas donde el proveedor sea actor, siempre que el domicilio del consumidor se encuentre en CABA, destacándose que no gozaran del beneficio de gratuidad y no podrán iniciar juicios ejecutivos en los que sean demandados consumidores.
- 7) Causas referidas a servicios públicos que se presten exclusivamente en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se encuentren

- sometidos al control del Ente Único Regulador de Servicios Públicos (Ley 210).
- 8) Ejecución de resoluciones sancionatorias ejecutoriadas o medidas preventivas.
 - 9) Ejecución de las sumas impuestas por la autoridad de aplicación en concepto de daño directo.
 - 10) En la ejecución de laudos emitidos por los Tribunales Arbitrales de Consumo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y laudos emitidos por el Sistema Nacional de Arbitraje de Consumo, dependiente del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación.
 - 11) Ejecución de acuerdos conciliatorios realizados ante el Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires celebrados entre usuarios afectados y las empresas prestadoras.
 - 12) Ejecución de resoluciones sancionatorias ejecutoriadas impuestas por el Ente Único Regulador de Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Segunda instancia

Con relación a la Cámara de Apelaciones en las Relaciones de Consumo, se establece que la misma será competente:

- (i) Como Tribunal de Alzada de los Juzgados de primera instancia de la Justicia en las Relaciones de Consumo.
- (ii) En el recurso directo 1) contra las providencias de la autoridad de aplicación que ordenan medidas preventivas, 2) contra resoluciones sancionatorias de la autoridad de aplicación y 3) las que impongan la reparación del daño directo.
- (iii) En el recurso directo contra resoluciones sancionatorias impuestas por el Ente Único Regulador de Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

III. Legitimados activos

Consumidores:

Establece poseen legitimación activa enunciando no solo a los consumidores definidos en el artículo 1º de la Ley de Defensa del Consumidor N° 24.240 (en adelante "LDC"), sino además aquellos que se encuentran incluidos en los artículos 1092, 1096 y 1102 del CCyCN.

El consumidor solicitante de daño directo en términos del 40 bis LDC a los efectos del recurso directo contra la resolución de la autoridad de aplicación que lo deniegue u otorgue en menor medida que la solicitada.

El adquirente o fiduciante-beneficiario que adquiriera, en términos del artículo 1666 del CCyCN, mediante un contrato de fideicomiso inmobiliario inscripto en el Registro Público de Contratos de Fideicomiso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siempre que los bienes inmuebles sean adquiridos como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social.

Proveedores:

Los proveedores en los términos del artículo 2 de la LDC y del 1093 del CCyCN. Con las limitaciones enunciadas en el acápite antecedente.

Otros:

Enuncia como legitimados además a:

- 1) La autoridad de aplicación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
- 2) Las asociaciones de consumidores y usuarios legalmente constituidas y registradas.
- 3) La Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
- 4) El Ministerio Público Tutelar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con los alcances previstos en el inciso 2 del Art. 53 de la Ley 1903 (Texto Ordenado por la Ley 6347
- 5) El Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

- 6) El Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Agregando que en el caso cuando no intervenga en el proceso como parte, éste actuará obligatoriamente como fiscal de la ley.
- 7) El Ente Único Regulador de Servicios Públicos de la CABA.

IV. Instancia conciliatoria previa

El Código admite diversos procedimientos para satisfacer la etapa conciliatoria previa y considerarla por tanto, agotada, permitiendo su acreditación mediante actas emitidas por:

- a) Servicio de Conciliación para las Relaciones de Consumo del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
- b) La autoridad de aplicación en Defensa del Consumidor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
- c) La Dirección General de Justicia, Registro y Mediación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el marco de una mediación comunitaria, cuando el conflicto encuadre en una relación de consumo.
- d) El Ente Único Regulador de Servicios Públicos de la CABA.
- e) COPREC
- f) Mediación Prejudicial Ley Nacional 26.589, cuando el conflicto encuadre en una relación de consumo.

Asimismo, dispone que no será necesaria la instancia previa para los procesos ejecutivos, los de ejecución de sentencia, la acción contra la publicidad ilícita, las medidas autosatisfactivas, las acciones de amparo y los procesos colectivos.

V. Oficina de Gestión Judicial

El Código prevé la creación de la Oficina de Gestión Judicial, la cual tendrá a su cargo la administración del despacho de las causas y notificar a las partes

todas las providencias y resoluciones del proceso a través del sistema electrónico.

VI. Domicilio electrónico

Se otorga preponderancia a la constitución del domicilio electrónico, indicándose que el domicilio constituido por el proveedor en la etapa conciliatoria previa persistirá en sede judicial y será donde se le notificará el traslado de la demanda. Disponiéndose que en caso de que el proveedor no hubiese concurrido o constituido domicilio electrónico en la etapa prejudicial, la notificación de la demanda se realizara por cedula dirigida al domicilio legal o en su defecto al domicilio real. Destacándose que a tal efecto, podrá efectuarse válidamente con carácter de constituido la notificación de la demanda realizada en el domicilio declarado en AFIP para el caso de personas humanas y en el organismo de registro en la jurisdicción correspondiente para el caso de personas jurídicas.

En caso de que el domicilio electrónico no se constituya en la primera presentación, las sucesivas resoluciones se tendrán por notificadas el día hábil siguiente de ser dictadas.

Todas las providencias y resoluciones del proceso se notificarán por intermedio de la Oficina de Gestión Judicial a través del sistema electrónico.

El Consejo de la Magistratura habilitará un registro para que los proveedores puedan modificar el domicilio constituido en la etapa prejudicial conciliatoria.

VII. Gratuidad e incidente de insolvencia

Las actuaciones judiciales promovidas por consumidores o usuarios individuales o colectivas se encuentran exentas del pago de tasa de justicia, timbrados, sellados, contribuciones, costas y de todo gasto que pueda irrogar el juicio.

Sin embargo, en caso de reclamos individuales de consumidores y cuando el monto del reclamo supere las (cien) 100 UMA (Unidad de Medida Arancelaria), valor actualmente estipulado en la cantidad de ARS 512.100, el demandado podrá acreditar que el actor dispone de recursos económicos suficientes para soportar los gastos del juicio mediante la tramitación de un incidente de solvencia. Es de destacarse que aun cuando el incidente de solvencia que prospere, el consumidor no deberá soportar la tasa de justicia.

El proveedor podrá solicitar la formación del incidente de solvencia en forma conjunta con la contestación de demanda y hasta el momento en que se fije la audiencia de vista de causa

No podrá peticionarse el incidente de solvencia contra acciones promovidas por Asociaciones de Consumidores.

Dicha solicitud deberá contener: 1) mención de los hechos en que se funda y 2) ofrecer prueba, siendo únicamente admisibles la prueba documental y la informativa.

El juez resolverá el incidente en el mismo acto de la audiencia de vista de causa y su decisión será apelable con efecto suspensivo.

VIII. Beneficio de litigar sin gastos para PYMES

El Código prevé que el proveedor, encuadrado en lo establecido por la Ley N° 25.300 "Ley de Fomento para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa" y el Art 2 de la Ley N° 24.467, podrá tramitar el beneficio de litigar sin gastos. La solicitud y el trámite deben efectuarse, en lo pertinente, con arreglo a las disposiciones previstas para el incidente de solvencia. El juez evaluará la solicitud con carácter restrictivo.

IX. Plazo para vistas y traslados

El plazo para contestar vistas y traslados, será de tres (3) o cinco (5) días, según se trate del proceso ordinario o ampliado respectivamente.

X. Publicidad de las sentencias

Todas las sentencias deberán ser publicadas en la forma que establezca la reglamentación. Estipulándose que, si afectare la intimidad de las partes o de terceros, los nombres de éstos serán eliminados de las copias para la publicidad.

XI. Medidas Cautelares

Las medidas cautelares podrán ser solicitadas antes o después de deducida la demanda, a menos que de la ley resultare que ésta debe entablarse previamente.

Si bien los jueces deberán abstenerse de decretar medidas precautorias cuando el conocimiento de la causa no fuese de su competencia, la medida ordenada por un juez incompetente será válida.

XII. Recurso de apelación

El recurso de apelación procede únicamente respecto de sentencias definitivas; sentencias interlocutorias; providencias simples que causen gravamen que no pueda ser reparado por la sentencia definitiva.

Serán inapelables todas las resoluciones en las que el valor que se intente cuestionar en la alzada no exceda el equivalente a diez (10) unidades de medida arancelarias (UMA) al valor vigente al momento de interponer la demanda, teniendo en cuenta para el cálculo el monto de condena o el monto del agravio, lo que resulte mayor. Sin embargo, cuando no hubiere forma para determinar el valor del monto de condena o del agravio o resultare dudosa su extensión, se admitirá la apelación.

En el proceso ordinario solo serán apelables las providencias que 1) decreten o denieguen medidas precautorias, 2) las que rechacen in limine la acción o resuelvan excepciones que hayan sido tratadas como previas, y 3) las sentencias definitivas o asimilables a ellas que pongan fin al proceso.

El plazo para apelar y fundar el recurso será de tres (3) días en el proceso ordinario y de cinco (5) días en el proceso ampliado, del que se correrá

traslado, en cada caso, por idéntico plazo al establecido para apelar. Los recursos serán concedidos con efecto diferido. Sólo en caso de sentencia definitiva, y cuando el código así lo disponga, será concedido libremente y con efecto suspensivo.

Como procedimiento en segunda instancia se celebrará audiencia y la totalidad de la prueba ordenada deberá ser producida antes de la audiencia, o durante la misma. Debiendo en dicha oportunidad, la parte que apelo, para el caso que así lo considere, ampliar verbalmente los fundamentos vertidos en su recurso debiendo los que deberán ser contestados por la contraparte en forma verbal en esa oportunidad.

Si la parte que hubiese recurrido no concurriese a la audiencia, se la tendrá por desistida del recurso de apelación.

La parte que apeló podrá acompañar con su recurso nuevos documentos, de fecha posterior a la sentencia de primera instancia.

XIII. Caducidad

Se impone al juez la carga de impulsar el proceso y en el caso de que la prosecución de la causa requiera ineludiblemente de una actividad de la parte actora, se la intimará por el término de cinco (5) días a la formulación de peticiones bajo apercibimiento de archivar el expediente sin más trámite.

XIV. Procesos individuales

En el caso de los procesos individuales se admiten dos tipos de proceso a saber:

(i) Proceso ordinario:

Como regla general las causas previstas en el Código se regirán por las normas del proceso ordinario.

Cuando las leyes especiales remitan al juicio o proceso sumario o sumarísimo, el litigio tramitará por el procedimiento del proceso ordinario.

- ✓ Traslado de la demanda: El traslado de la demanda se ordenará por el plazo de cinco (5) días. No será admisible la reconvencción.
- ✓ Citación de terceros: Se admitirá la citación de terceros siempre y cuando hubieren sido oportunamente citados a la etapa prejudicial por alguna de las partes en cualquier carácter.
- ✓ Carga de la prueba: Los proveedores deberán aportar al proceso todos los elementos de prueba que obren en su poder, conforme a las características del bien o servicio, prestando la colaboración necesaria para el esclarecimiento de la cuestión debatida en el juicio.
- ✓ Plazos: Todos los plazos serán de tres (3) días, con excepción del plazo para contestar demanda que como mencionamos será de cinco (5) días.
- ✓ Acuerdo conciliatorio: En caso de que las partes arriben a un acuerdo con anterioridad a la celebración de la audiencia de vista de causa el juez podrá eximir al proveedor de hasta un cincuenta por ciento (50 %) del monto de la tasa de justicia que corresponda abonar.
- ✓ Audiencia de vista de causa: El juez fijara audiencia de vista de causa en la cual es obligatoria su presencia, ésta será pública, oral y videograbada, debiéndose citar además al Ministerio Público Fiscal bajo pena de nulidad.

Si la parte actora no compareciera a la audiencia sin causa justificada, se la tendrá por desistida del proceso, salvo que justificara su inasistencia dentro del quinto día hábil, en cuyo caso, el Juez podrá fijar una nueva audiencia.

En caso de incomparecencia del demandado, debidamente citado, el procedimiento continuará en su rebeldía y se le aplicará una multa de hasta cinco (5) Unidades de Medida Arancelaria (UMA), en beneficio del consumidor, ejecutable por vía incidental. El demandado quedará notificado de todas las decisiones en la audiencia.
- ✓ Sentencia: Finalizada la audiencia, el juez dictará sentencia en el mismo acto pudiendo diferir su fundamentación, la que deberá efectuar dentro del plazo de cinco (5) días. Si la complejidad de la causa lo

exigiera, podrá posponer el dictado de la sentencia, que deberá ser pronunciada dentro del plazo mencionado.

(ii) Proceso Ampliado

Todas las contiendas judiciales que no tuvieren señalado un proceso especial, tramitarán por el proceso ampliado.

Las acciones promovidas por el proveedor se registrarán por el proceso ampliado.

- ✓ Traslado de la demanda: El traslado de la demanda se ordenará por el plazo de quince (15) días.
- ✓ Audiencia preliminar: El juez citará a las partes a una audiencia video grabada, ésta será presidida por él.

Si la parte actora no compareciera a la audiencia sin causa justificada, se la tendrá por desistida del proceso.

En caso de incomparecencia del demandado, debidamente citado, el procedimiento continuará en su rebeldía y se le aplicará una multa de hasta cinco (5) Unidades de Medida Arancelaria (UMA), en beneficio del consumidor, ejecutable por vía incidental. El demandado quedará notificado de todas las decisiones en la audiencia y no podrá impugnarlas.

Se le tendrán por reconocidos los hechos alegados por la actora excepto que se vinculen a derechos indisponibles o sean desvirtuados por la prueba.

- ✓ Audiencia de vista de causa: La audiencia de vista de causa se celebrará de conformidad con lo dispuesto para el proceso ordinario.
- ✓ Sentencia: Una vez producida la totalidad de la prueba, se declarará la clausura del periodo probatorio y se llamarán los autos a sentencia que deberá dictarse dentro de los treinta (30) días.

Si la cuestión a resolver no presentara complejidad, podrá el juez dictar el fallo en la misma audiencia. En ese caso, tendrá diez (10) días para fundar la decisión.

XV. Procesos colectivos de consumo.

(i) Legitimación: Tienen legitimación activa en los procesos colectivos de consumo, a saber:

- ✓ Derechos de incidencia colectiva individuales homogéneos:
 - a) los afectados que demuestran un interés razonable,
 - b) el Defensor del Pueblo de la CABA,
 - c) las asociaciones que tengan por objeto la defensa de los consumidores reconocidas por la autoridad de aplicación,

- ✓ Derechos de incidencia colectiva y difusos:
 - a) los afectados que demuestran un interés razonable,
 - b) el Defensor del Pueblo de la CABA,
 - c) la autoridad de aplicación,
 - d) las asociaciones que tengan por objeto la defensa de los consumidores reconocidas por la autoridad de aplicación,
 - e) el Ministerio Público Fiscal, Tutelar y de la Defensa.

Los procesos colectivos de consumo cuentan con el beneficio de justicia gratuita.

En los procesos colectivos, excepto que los mismos hayan sido iniciados por el Ministerio público, el Ministerio Público Fiscal actuará obligatoriamente como fiscal de la ley y se aplica el artículo 35 en cuanto fuere pertinente.

(ii) Presupuestos de admisibilidad del proceso:

- a) Numero razonable de interesados, que dificulte la sustanciación individual de las respectivas pretensiones;
- b) Intereses comunes a todos los integrantes de la clase;
- c) Argumentos comunes;
- d) Representación adecuada que sustente la pretensión de la clase, acreditada mediante la certificación de la adecuada representación.

- e) En las acciones previstas con sustento en derechos de incidencia colectiva y difusos, se deberá acreditar la existencia de la relación de consumo que funda la pretensión, la imposibilidad de sustanciación individual y los antecedentes particulares y/o colectivos de los que se dispone que justifican el impulso del proceso colectivo de consumo.
 - f) El procedimiento de mediación previa no resulta de aplicación obligatoria en los procesos colectivos. Sin embargo, debe tenerse presente que de agotar las partes dicha instancia ante las autoridades de aplicación de la ley, éstas determinarán los requisitos relacionados con los mecanismos de transparencia y adecuada participación de los interesados, que deberán regir el trámite de las audiencias respectivas
 - g) Para la admisibilidad de los procesos colectivos en los que se reclama la reparación de daños a derechos individuales homogéneos, además de los presupuestos de admisibilidad generales, es necesario que:
 - 1. El enjuiciamiento concentrado del conflicto constituya una vía más eficiente y funcional que el trámite individual o la imposibilidad o grave dificultad de constituir un litisconsorcio entre los afectados;
 - 2. Exista un predominio de las cuestiones comunes de origen fáctico o jurídico, por sobre las individuales.
- (iii) Certificación de la adecuada representación: Cuando el proceso colectivo sea iniciado por un sujeto de derecho privado, el tribunal determinará previamente, si el actor cuenta con aptitudes suficientes para garantizar la correcta defensa de los intereses colectivos. Para ello se tendrá en cuenta: la experiencia y antecedentes para la protección de este tipo de intereses, y, la coincidencia entre los intereses de los miembros del grupo, categoría o clase y el objeto de la demanda, así

como la ausencia de potenciales conflictos de intereses con el grupo afectado o los derechos en juego.

(iv) Objeto del proceso: El objeto del proceso colectivo podrá consistir en:

1. La prevención con el fin de evitar la afectación de los derechos de incidencia colectiva o la continuidad futura de la afectación;
2. La reparación de los daños ya producidos;
3. La restitución de sumas percibidas sin derecho por los proveedores.

Derechos de incidencia colectiva colectivos o difusos:

- ✓ Corresponde prioritariamente la reposición al estado anterior al hecho generador de la afectación. Si ello es total o parcialmente imposible, o resulta insuficiente, procede una indemnización.
- ✓ Si ella se fija en dinero, tiene el destino que le asigna el juez por resolución fundada.
- ✓ En los casos en que el proceso tuviere por objeto la reparación de los daños el juez podrá, a los fines de la mejor gestión del proceso, individualizar subclases de consumidores en razón de la existencia de elementos comunes a cada una de ellas.

(v) Notificación: La existencia del proceso colectivo deberá notificarse del modo y por los medios que aseguren, de la mejor manera posible, su efectivo conocimiento conforme el principio de razonabilidad.

(vi) Sentencia: La sentencia recaída en un proceso colectivo referido a derechos individuales homogéneos produce efectos "erga omnes", excepto que la pretensión sea rechazada. Este efecto no alcanza a las acciones individuales fundadas en la misma causa cuando el consumidor optó por quedar fuera. La sentencia que rechaza la pretensión no impide la posibilidad de promover o continuar las

acciones individuales por los perjuicios ocasionados a cada damnificado. Otro proceso colectivo por la misma causa y objeto puede iniciarse cuando existan nuevas pruebas.

XVI. Procesos especiales.

(i) Acción contra la publicidad ilícita.

- ✓ Legitimación: Están legitimados para el ejercicio de esta acción todos los indicados en el capítulo de legitimación activa del presente.
- ✓ Plazo de interposición: La acción podrá interponerse mientras el mensaje publicitario se encuentre en curso de emisión o hasta los diez (10) días después de haber concluido su difusión.
- ✓ Tramite de la acción: La acción tramitará únicamente por el proceso ordinario previsto en este código y no requerirá instancia conciliatoria previa. La petición podrá incluir la imposición de avisos rectificatorios.
- ✓ Requisitos para la interposición de la acción: El actor deberá justificar, especificando con claridad y precisión, que el mensaje publicitario cuestionado se encuentra comprendido en las previsiones del art. 1101 del CCyCN o de cualquier otra norma nacional o local vigente o que se dicte en el futuro regulando la actividad publicitaria. De estar a su alcance, deberá acompañar en soporte físico o magnético el mensaje publicitario ilícito, e indicar los medios de comunicación que según su conocimiento difunden el mensaje sin perjuicio de la aplicación de las previsiones para la prueba anticipada.
- ✓ Tramite: El juez podrá, de oficio y sin audiencia del demandado:
1) rechazar in limine la acción dentro de los dos (2) días de interpuesta, en caso de resultar manifiestamente inadmisibles. La decisión es apelable. La apelación se concede con efecto no suspensivo. 2) ordenar, corroborando la verosimilitud del

derecho y el peligro en la demora, a el/los demandados la cesación de la publicidad ilícita cuando se encuentren involucradas la salud, integridad o seguridad de las personas, o en el supuesto del inciso c) del art. 1101 del CCyCN. La decisión es apelable como medida cautelar.

- ✓ Sentencia: El juez podrá 1) ordenar el otorgamiento al anunciante de un plazo para eliminar los aspectos ilícitos del mensaje publicitario objeto de la acción o la cesación definitiva de la emisión del mensaje ilícito. 2) disponer, si hubiese sido solicitado por la parte o si el juez lo considerase necesario, la difusión de publicidad correctiva determinando el contenido de aquella y sus modalidades y plazos, que deberán ser proporcionales a la pauta publicitaria ejecutada del mensaje ilícito y a costa del anunciante.

En todos los casos podrán dictarse las medidas bajo apercibimiento de sanciones conminatorias en caso de incumplimiento.

- (ii) Acción meramente declarativa: Esta acción podrá deducirse para obtener una sentencia meramente declarativa, con el fin de hacer cesar un estado de incertidumbre sobre la existencia, alcance o modalidades de una relación jurídica, siempre que esa falta de certeza pudiera producir un perjuicio o lesión actual al actor y éste no dispusiera de otro medio legal para ponerle fin inmediatamente.

Solicitada por el consumidor: éste podrá solicitar que tramite por las reglas del procedimiento ordinario. En caso contrario, se aplicarán las reglas del proceso ampliado.

- (iii) Acción preventiva. Daño temido: Quien tema que una acción u omisión antijurídica hace previsible la producción de un daño, su continuación o agravamiento puede solicitar al juez las medidas de seguridad adecuadas en los términos de los arts. 1710 y siguientes del CCyCN.

O'FARRELL

ABOGADOS DESDE 1883

Recibida la demanda el juez llamará a audiencia a los interesados y podrá disponer las medidas encaminadas a hacer cesar el peligro.

Quedamos a disposición para cualquier consulta

Lorena Quiroz

Jorge I. Muratorio